JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Diciembre catorce de dos mil veintidós.

TUTELA No. 1100131030272022-00517-00 de : OTONIEL GUTIERREZ contra JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.

Procede el Despacho a decidir la presente acción de tutela con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El señor OTONIEL GUTIERREZ actuando en causa propia, acude a esta judicatura para que le sean tutelados los derechos fundamentales al debido proceso, Acceso a la Administración de justicia, igualdad, petición que considera el accionante fueron vulnerados por el aquí accionado.

La tutela se fundamenta en hechos que se sintetizan, así: Que el 1º. De abril de 2016, fue demandado por el señor JOSE DOMINGO BARRERO FERNANDEZ con base en un contrato de arrendamiento, proceso que le correspondió al Juzgado 28 Civil Municipal con radicado 2016-106, decretándose medidas cautelares contra un bien inmueble de su propiedad,

Señala que el citado proceso se termino con auto del 14 de noviembre de 2017 y se archivo en abril del 2018.

Indica que el 4 de octubre de 2022, elevo petición al Juzgado accionado, solicitando actualizar o expedir los oficios cancelando la medida cautelar, sin que a la fecha haya obtenido respuesta.

Solicita que a través de este mecanismo se amparen los derechos fundamentales invocados, y se ordene al Juzgado accionado, resolver el escrito presentado, dando las soluciones del caso e informando los tramites realizados.

TRAMITE PROCESAL

Por auto de diciembre 6 de 2022, se admitió la acción de tutela requiriendo a la parte accionada para que en el término de dos

días se pronunciaran sobre los hechos y circunstancias que motivaron la acción constitucional y enviaran lo pertinente sobre el proceso al cual refiere la misma.

CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA

JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL

Dice que efectivamente en ese despacho cursó el proceso Ejecutivo Singular No 11001400302820160010600 de JOSE DOMINGO BARRERO FERNANDEZ contra OTONIEL GUTIERREZ Y FABIO ORLANDO VARGAS.

Que el proceso fue terminado por pago total de la obligación mediante providencia del 14 de noviembre de 2017, se elaboró oficio de desembargo No 2377 del 28 de noviembre de 2017. El expediente fue archivado en el año 2019 en el paquete 819 entregado a las Bodegas de Archivo Central.

Indica que una vez Verificada la solicitud efectuada por el accionante se advierte que en efecto en el buzón de entrada del correo institucional el día 04 de octubre de 2022, se recibió solicitud de actualización de oficios de desembargo. Solicitud que fue contestada el mismo día, informándole la ubicación del proceso, el tramite del desarchivo e indicándole todos los datos y el procedimiento completo.

Señala que el proceso fue digitalizado por parte de archivo central y puesto a disposición del Juzgado.

Se allego el link del expediente en el cual se observa que se efectuó el oficio No.1756 de fecha 9 de diciembre de 2022 dirigido a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos comunicando el desembargo del inmueble con matrícula 50S-40201593 el cual le fue enviado al aquí accionante al correo electrónico el Dia 12 de diciembre de este año, para sui diligenciamiento.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concorre a esta judicatura el señor OTONIEL GUTIERREZ solicitando le den respuesta a la petición que presento dando las soluciones del caso.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presenta el señor OTONIEL GUTIERREZ.

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es el JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, cumpliéndose en este caso dicho requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Teniendo en cuenta los derechos que indica el accionante como vulnerados y con respecto al **Derecho del Debido proceso**, en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho de defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho .

El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho al debido proceso, que se entiende como “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”. Tal derecho, siendo de aplicación general y universal “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico.

De conformidad con la disposición anterior, los artículos 229 Superior y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia, cuyo contenido ha sido definido por la alta Corporación como *“la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las ley* Entonces, aquella

prerrogativa de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.

De los hechos narrados en la petición de tutela, y la respuesta dada por el Juzgado 28 Civil Municipal y la prueba allegada de haber resuelto lo solicitado por el accionante, ya que se elaboro el oficio No. 1756 de diciembre 9 de 2022, dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, comunicando el desembargo del inmueble con matrícula 50S-40201593, el cual le fue enviado al correo electrónico del señor Otoniel Gutiérrez para que procediera con el diligenciamiento del mismo, por consiguiente, el amparo impetrado no tiene prosperidad, por cuanto el objetivo de la tutela ha desaparecido y por ende se configura el hecho superado.

Como se dijo y se repite ahora, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, amparo en el cual el juez, una vez analizado el caso particular, proferirá fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados.

La Corte Constitucional a este respecto ha dicho:

“...la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”. (Corte Constitucional, Sentencia T-519 16 Septiembre de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Como se cumplió por el accionado lo pretendido por el accionante al haberse efectuado el oficio de desembargo y habersele remitido, para el trámite respectivo, es por lo que éste Juzgado, atendiendo los elementos de hecho que concurren en el presente caso no accede a la protección impetrada por darse la situación de hecho superado.

Por tanto, no hay lugar a conceder la tutela.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- NEGAR el amparo constitucional impetrado por **OTONIEL GUTIERREZ** contra **JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.** por darse la situación de hecho superado.

2.- Notifíquesele a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3.- Remítase el expediente, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0e4188f17627aca6acdac62b2cd26c961af02c9135541ae69545409974c9f9fc**

Documento generado en 14/12/2022 08:01:49 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>